



# Asamblea General

Sexagésimo noveno período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general  
12 de diciembre de 2014  
Español  
Original: inglés

## Sexta Comisión

### Acta resumida de la séptima sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el viernes 10 de octubre de 2014, a las 15.00 horas

*Presidenta:* Sra. Millicay (Vicepresidenta) . . . . . (Argentina)

*más tarde:* Sr. Gharibi (Vicepresidente) . . . . . (República Islámica del Irán)

## Sumario

Tema 82 del programa: El estado de derecho en los planos nacional e internacional  
(*continuación*)

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse lo antes posible, con la firma de un miembro de la delegación interesada, al Jefe/a la Jefa de la Dependencia de Control de Documentos ([srcorrections@un.org](mailto:srcorrections@un.org)), e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las actas corregidas volverán a publicarse electrónicamente en el Sistema de Archivo de Documentos de las Naciones Unidas (<http://documents.un.org/>).

14-62403 (S)



Se ruega reciclar



*En ausencia del Sr. Manongi (República Unida de Tanzania), la Sra. Millicay (Argentina), Vicepresidenta, ocupa la Presidencia.*

*Se declara abierta la sesión a las 15.10 horas.*

**Tema 82 del programa: El estado de derecho en los planos nacional e internacional**

(A/69/181 y A/68/213/Add.1) (continuación)

1. **El Sr. Kohona** (Sri Lanka) dice que, al examinar el estado de derecho, es importante ser consciente de la diversidad de los sistemas jurídicos del mundo, sus fundamentos filosóficos y la evolución de las circunstancias económicas y sociales. A lo largo del tiempo, la civilización humana ha dado origen a distintos marcos jurídicos con el objeto de mantener el orden público, la paz y la seguridad y los intereses individuales y colectivos y, al mismo tiempo, distinguir en sentido amplio entre el bien y el mal. Si bien algunos principios comunes han influido en la evolución de todos los principales sistemas jurídicos, algunos factores sociales, religiosos, filosóficos y culturales concretos han desempeñado una función significativa en la evolución del estado de derecho en distintas regiones. En el mundo moderno es necesario que todos los sistemas jurídicos nacionales se respeten mutuamente, como ha destacado la Organización Internacional para el Derecho del Desarrollo.

2. En el plano nacional, el estado de derecho es la piedra angular de una sociedad justa y funcional y de la promoción de los intereses públicos y privados. Sin él, el debate de cuestiones como los derechos individuales y colectivos, el desarrollo económico y la conservación del medio ambiente carecería de sustancia. En el contexto de los debates sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda para el desarrollo después de 2015, se debe tener presente que el fortalecimiento del estado de derecho es esencial para el progreso económico. Se deben aplicar criterios a largo plazo, encaminados a reforzar las instituciones internas, si se quiere mejorar la trama económica y social de las sociedades.

3. Sri Lanka tiene un gran apego al estado de derecho y, en su marco jurídico, ha dado cabida a su diversidad cultural, étnica y religiosa, como lo demuestran las numerosas disposiciones sobre derechos fundamentales incorporadas en su Constitución. Esas disposiciones autorizan a las personas afectadas a recurrir ante los tribunales sin necesidad de un abogado y han

contribuido a la promoción y protección de los derechos del niño, el empoderamiento de la mujer y la protección de los grupos minoritarios. El poder judicial ha dado efecto a otras normas que protegen los derechos de las minorías.

4. La intensificación de las actividades recientes de la comunidad internacional dirigidas a abordar la amenaza del terrorismo ha puesto en primera línea los problemas que entraña equilibrar las preocupaciones nacionales y de seguridad con las obligaciones relacionadas con los derechos humanos. Al emplear estrategias como usar a civiles como escudos humanos, los grupos terroristas han explotado la responsabilidad de los Estados de respetar sus obligaciones internacionales, aun en épocas de conflictos letales. Es imperioso que los Estados cooperen en los planos nacional, regional e internacional a fin de hacer frente a la amenaza del terrorismo y no ser víctimas de la agenda terrorista. Los problemas transnacionales seguirán multiplicándose debido a la cada vez mayor interconectividad mundial, por lo que la cooperación entre los Estados y la preparación de respuestas comunes a las cuestiones globales son más importantes que nunca.

5. Después de las matanzas de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, con su empeño en la institucionalización del multilateralismo, han ejercido una función esencial en la creación de un orden internacional que ha impedido que el mundo vuelva a caer en otra guerra de proporciones globales. La clave del éxito ha radicado en el hincapié abrumador que se hace en la Carta en los principios de soberanía nacional y no injerencia en los asuntos internos de los Estados, salvo en circunstancias claramente definidas. Esos dos principios son el baluarte del orden internacional actual, protegiendo a los débiles y desalentando el uso de la fuerza para resolver conflictos. Sin embargo, habrá que volver a examinar los marcos jurídicos internacionales elaborados en respuesta al equilibrio político y económico mundial que existía al concluir la Segunda Guerra Mundial a la luz de las circunstancias contemporáneas, particularmente teniendo en cuenta los cambios en el equilibrio económico mundial.

6. Sri Lanka ha hecho una contribución eficaz al desarrollo del estado de derecho, como lo demuestra la función que desempeñó en la codificación del derecho del mar. Continuará fortaleciendo el estado de derecho en su sistema jurídico interno y sigue dispuesta a colaborar en el fortalecimiento del estado de derecho en el ámbito internacional.

7. **El Sr. Tupouniua** (Tonga) acoge complacido que el debate en curso se centre en la manera en que se comparten las prácticas nacionales para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia, y dice que Tonga se ha comprometido a facilitar el acceso a la justicia a todos los pequeños Estados insulares en desarrollo del Pacífico y a promover la solución pacífica y eficaz de controversias en los planos regional e interno. Participa en el Programa de Desarrollo Judicial del Pacífico, cuyo objetivo es fortalecer la gobernanza y el estado de derecho en la región del Pacífico con un mejor acceso a la justicia y la garantía de la independencia de los funcionarios judiciales. Entre los componentes de la etapa actual del programa cabe mencionar el ofrecimiento de capacitación de alta calidad a los funcionarios judiciales, servicios de fomento de los tribunales y cursos prácticos de creación de conciencia sobre violencia en la familia y justicia juvenil. Tonga también participa en el Programa de Promoción de la Justicia de Género en el Pacífico, una iniciativa de ONU-Mujeres, y ha adoptado medidas decisivas para facilitar la participación de la mujer en el ámbito judicial. También ha puesto en marcha un proceso para la traducción de las leyes al idioma de Tonga, con miras a facilitar el acceso de todos sus nacionales a la ley y la justicia. Se considera que las actividades de este tipo son esenciales para fortalecer el estado de derecho en el plano nacional. Tonga exhorta a todos los Estados Miembros a que faciliten la participación, tanto a nivel nacional como regional, con miras a mejorar el acceso a la justicia para todos y fomentar un sistema jurídico justo y equitativo. También insta a los Estados a que alienten el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, y a que respeten las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional.

8. A nivel internacional, los Estados han afirmado la importancia de fomentar y mantener la cooperación dentro de la comunidad internacional por conducto del derecho internacional y los tres pilares de las Naciones Unidas, que están vinculados directamente a la agenda de desarrollo para después de 2015 y los objetivos de desarrollo sostenible que se están debatiendo en la actualidad, al igual que a la búsqueda de criterios de asociación con participantes múltiples. Algunos Estados han manifestado que se debe aplicar al estado de derecho un criterio más orientado a la acción y que se debería crear un mecanismo de seguimiento. También han dicho que, en el contexto del estado de

derecho, habría que abordar la función que desempeña el Consejo de Seguridad en el marco de las Naciones Unidas. Tonga hace suyas esas observaciones.

9. El Consejo de Seguridad contribuye al desarrollo del derecho internacional al garantizar estándares de conducta equitativos para todos los Estados y, de esa manera, mantener la paz y seguridad internacionales. En tal sentido, Tonga desea reiterar su opinión respecto de las consecuencias del cambio climático, que podría dar lugar a la desaparición de islas y territorios y promover grandes desplazamientos de personas, incluso a lo largo de fronteras internacionales. Tonga observa muy esperanzada el hecho de que se haya ampliado el alcance de lo que podrían considerarse amenazas a la paz y seguridad internacionales, en un momento en que las cuestiones sanitarias —en particular el reciente brote de ébola— han sido correctamente tenidas en cuenta por el Consejo y en general por los miembros de las Naciones Unidas. De la misma manera, el Consejo debería considerar la amenaza que el cambio climático podría plantear a la paz y seguridad internacionales y adoptar decisiones sobre la conducta adecuada de los Estados en tal sentido, con lo que de esa manera se progresaría respecto del estado de derecho pertinente a ese ámbito y se ayudaría a proteger a todos los interesados.

10. Los Estados Miembros también han destacado la importancia de la Corte Internacional de Justicia y del Tribunal Internacional del Derecho del Mar en la solución pacífica de controversias y el desarrollo del derecho internacional. Las dos instituciones contribuyen al desarrollo del derecho en esferas de importancia fundamental para Tonga, entre ellas el derecho internacional ambiental y el derecho del mar. Los fallos en que establecen estándares de diligencia debida en el derecho internacional ambiental son fundamentales en las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Sus opiniones consultivas respecto de los fondos marinos también desempeñan una función importante en la gestión de los fondos marinos en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. Varios tribunales arbitrales establecidos con arreglo al anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar también han resuelto cuestiones de importancia vital para Tonga y la gobernanza de los océanos. El fortalecimiento del estado de derecho en esas esferas permitirá una mayor cooperación internacional mediante el acceso a la justicia. Las actividades de codificación y desarrollo

progresivo de la Comisión de Derecho Internacional en ámbitos como la protección de la atmósfera también son importantes para Tonga y otros Estados Miembros, y su delegación apoya a la Comisión en sus actividades destinadas a abordar esa cuestión.

11. **El Sr. Aprianto** (Indonesia) dice que el acceso a la justicia es una parte importante de la aplicación por Indonesia del estado de derecho en el plano nacional. Se trata de una actividad encomendada por la Constitución y es uno de los cinco pilares filosóficos del Estado. La justicia es un derecho humano fundamental acordado por los Estados a sus nacionales de conformidad con el principio de igualdad ante la ley. El estado de derecho es el fundamento de la promoción y protección de los derechos humanos y del sostenimiento de la justicia social, que son indispensables para mantener la cohesión y estabilidad en países multiétnicos y con diversidad religiosa, como Indonesia. El Gobierno de Indonesia ha afirmado repetidamente su compromiso de mejorar el sistema jurídico nacional y reforzar el acceso a la justicia para todos sus nacionales. El acceso a la justicia ha evolucionado del simple concepto de ofrecer acceso público a las instituciones de asistencia letrada a una reforma total del sistema jurídico nacional que tiene en cuenta el carácter, las costumbres, las tradiciones y los valores de su pueblo. En 2009 el Gobierno puso en marcha una estrategia nacional de acceso a la justicia, que más tarde pasó a ser un elemento importante de la estrategia nacional general de desarrollo.

12. Para consolidar y reforzar el acceso a la justicia se deben aplicar enérgicamente dos estrategias fundamentales. La primera es la creación de capacidad humana e institucional, esenciales para el fomento de una cultura de adhesión al estado de derecho y a la justicia social, así como para la reforma en curso de las instituciones judiciales de Indonesia. Se trata, sin embargo, de una actividad a largo plazo para la que se requieren educación y capacitación. En consecuencia, el Gobierno trabaja con las instituciones educativas pertinentes a fin de reforzar los valores de la justicia social en los programas de estudio jurídicos. También se ofrece capacitación a los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley para mantenerlos al tanto de las novedades en los planos local, regional e internacional. Un elemento importante del programa de capacitación es compartir las mejores prácticas con funcionarios de distintos países. Además, en el año 2000 se estableció una comisión de defensores del

pueblo, con miras a facilitar la presentación de denuncias públicas contra instituciones estatales y empresas privadas que prestan servicios públicos y, de esa manera, facilitar el acceso del público a la justicia.

13. Una segunda estrategia esencial es aumentar la transparencia del proceso legislativo mediante una mayor participación de los interesados pertinentes, entre ellos la sociedad civil y las instituciones educativas. La transparencia es importante no solo para mantener la rendición de cuentas, sino también para crear un sentimiento de participación de la comunidad y de identificación con una ley en particular. En consecuencia, la Cámara de Diputados de Indonesia sistemáticamente publica todos los proyectos de ley que se habrán de debatir. Los tribunales internos también han adoptado medidas para aumentar la transparencia, al ofrecer acceso público a sus decisiones.

14. En la experiencia de Indonesia, el sentimiento de participación e implicación alienta a la población a manifestarse en defensa de sus derechos. Para garantizar justicia a quienes procuran defender sus derechos se han promulgado leyes sobre asistencia letrada, en las que se hace referencia específica a la prestación de ese tipo de asistencia a los pobres. Varias políticas e instrumentos jurídicos ofrecen a la mujer garantías de acceso a la justicia. La ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la creación de una comisión nacional sobre la violencia contra la mujer son dos ejemplos de cómo en Indonesia la mujer ha avanzado más allá de la discriminación y la exclusión. Sin embargo, el aspecto más alentador de los progresos de Indonesia en el desarrollo jurídico fue la creación en 2003 de su Corte Constitucional. A partir de ese momento, la Corte ha sido el foro preferido de quienes procuran impugnar la legislación que, en su opinión, contraviene la Constitución o viola sus derechos constitucionales.

15. En el plano internacional, se necesitan tres elementos para garantizar el estado de derecho. En primer lugar, todos los Estados deben estar plenamente comprometidos con un orden internacional fundado en el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas. En segundo término, todos los órganos principales y organismos especializados de las Naciones Unidas no solo deben funcionar sino también parecer que funcionan respetando los estándares más altos de justicia y equidad. Con ese fin, las propias Naciones Unidas deberán introducir las reformas que correspondan y reflejen las realidades del presente,

más que las del pasado. Son fundamentales la reforma del Consejo de Seguridad, esperada desde hace tanto tiempo, y la revitalización de la Asamblea General. Por último, hay que vigilar de cerca la brecha que existe entre los compromisos contraídos a nivel internacional y su ejecución a nivel nacional. Las Naciones Unidas se encuentran en una posición estratégica para prestar apoyo a los Estados Miembros en tal sentido.

16. **El Sr. Momen** (Bangladesh) recuerda la definición de estado de derecho que figura en el documento [A/66/749](#) y dice que el estado de derecho exige medidas que aseguren la adhesión a los principios de supremacía del derecho, igualdad ante la ley, rendición de cuentas ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, seguridad jurídica, evitación de la subjetividad y arbitrariedad y transparencia procesal y jurídica. La justicia es fundamental para el estado de derecho y para asegurar los derechos y la dignidad de todos; se debe facultar a la población a procurar justicia y tener acceso a ella y a los mecanismos establecidos para otorgarla.

17. El estado de derecho, tanto en el plano nacional como internacional, es uno de los valores básicos de las Naciones Unidas. Mediante la autoridad de establecer normas universales que corresponde a la Asamblea General, las facultades de ejecución del Consejo de Seguridad y el poder judicial de la Corte Internacional de Justicia, la Organización desempeña una función vital en la promoción y el mejoramiento del estado de derecho en el plano mundial. Las normas de derecho internacional elaboradas en las Naciones Unidas aportan el marco normativo para promover y preservar las relaciones pacíficas y de amistad entre las naciones y, en consecuencia, deben ser observadas por todos los Estados.

18. Bangladesh está convencido de que el estado de derecho es una condición necesaria para la paz sostenible, la protección de los derechos humanos y el desarrollo social y económico de todas las sociedades. En los últimos años, el Gobierno ha emprendido reformas muy necesarias en los ámbitos administrativos, judicial y electoral, incluida la separación de la judicatura del poder ejecutivo. También ha reforzado la comisión de lucha contra la corrupción, un órgano constitucional independiente, y ha establecido una comisión de derechos humanos encargada de salvaguardar los derechos de todos los nacionales y asegurar que se respeten los estándares

internacionales de derechos humanos y libertades individuales. Se ha creado una comisión de información para garantizar a todos los nacionales el acceso libre a la información pública. Recientemente se han promulgado leyes que prestan asistencia a los niños con autismo, salvaguardan los derechos de las personas con discapacidad y protegen a mujeres y niños de la violencia en la familia y la discriminación. También se han adoptado medidas para asegurar que las instituciones encargadas del cumplimiento de la ley rindan cuentas y funcionen en el marco de las normas y los principios jurídicos internacionales.

19. Bangladesh presta un apoyo inequívoco a la solución de conflictos por medios pacíficos y no militares. A fin de lograr paz y estabilidad sostenibles, hay que promover una mentalidad de tolerancia, respeto y amor al prójimo, cualquiera sea su color, origen étnico o religión. En la actualidad, la paz se ve amenazada por guerras civiles, alzamientos, intolerancia religiosa, delincuencia transnacional, terrorismo, piratería, los efectos del cambio climático, crisis financieras y de energía y la aplicación partidista de la ley, lo que hace más evidente que nunca la necesidad de la aplicación justa y equitativa del derecho internacional, la adhesión a la Carta y el recurso a la Corte Internacional de Justicia para el arreglo pacífico de controversias. Bangladesh presta apoyo a las actividades encaminadas a sostener la igualdad soberana, integridad territorial e ideología política de todos los Estados y asegurar que los Estados se abstengan de la amenaza o el uso de la fuerza y resuelvan sus controversias de manera pacífica. Habida cuenta de la fuerte interrelación que existe entre estado de derecho y desarrollo, la promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional es esencial para el crecimiento económico sostenido e inclusivo. Esa interrelación deberá consagrarse en la agenda internacional para el desarrollo después de 2015.

20. **El Sr. Gharibi** (República Islámica del Irán) dice que el acceso a la justicia es un derecho constitucional de todos los iraníes, y todos ellos tienen acceso a los tribunales. Tanto en las causas civiles como penales, se ofrece representación letrada gratuita a quienes no pueden pagar un abogado. Para facilitar el acceso a la justicia en todo el país, en todas las provincias y ciudades se establecerán tribunales, incluidos de familia y otros especiales. Una red electrónica que permite a los ciudadanos entablar en línea demandas civiles ha hecho que el acceso a la justicia sea significativamente más rápido, sencillo y transparente.



21. Los Estados deben hacer todo lo posible para promover el estado de derecho en el plano nacional. Sin embargo, se debe reconocer que los Estados tienen el derecho soberano de establecer su propio modelo de estado de derecho y administración de justicia y de desarrollar sistemas jurídicos y judiciales eficientes y justos basados en sus propias tradiciones culturales, históricas y políticas. En sus actividades de asistencia al estado de derecho, las Naciones Unidas deben adherirse estrictamente al principio de implicación nacional. La mejor manera de ayudar a los Estados Miembros es facilitar el intercambio de mejores prácticas. Toda tentativa de categorizar a los Estados con fundamento en indicadores artificiales tendrá resultados desfavorables.

22. Se debe prestar más atención al estado de derecho en el plano internacional, en donde no se han cumplido las expectativas. Como se puede apreciar en el informe del Secretario General (A/68/213/Add.1), hay algunos estándares respecto de los logros del estado de derecho en el plano nacional, pero en plano internacional solo se ofrecen descripciones generales. Dentro de las Naciones Unidas, el fundamento del estado de derecho es la adhesión estricta a los propósitos y principios de la Carta; sin embargo, para algunos países, la amenaza o el uso de la fuerza sigue siendo la norma en sus relaciones internacionales. Ese tipo de conducta debe denunciarse enérgicamente. La Sexta Comisión debe seguir procurando una clara visión común de cómo promover el estado de derecho en el plano internacional. Entre las cuestiones que deben abordarse en tal sentido cabe mencionar el uso de la fuerza, la reforma del Consejo de Seguridad, las sanciones y la aplicación extraterritorial de la legislación interna.

23. La aplicación extraterritorial de la legislación interna hecha de manera unilateral por un país contra otro constituye una clara contravención del estado de derecho en el plano internacional. Las medidas de este tipo son una manifestación obvia del imperio de la fuerza mediante el uso indebido de un instrumento jurídico y, en muchos casos, podrían tipificarse como actos ilícitos internacionales que dan lugar a la responsabilidad internacional de los Estados del caso, incluida la obligación de una indemnización plena por los daños causados a los Estados objeto de las medidas. Los Estados Miembros nunca deben permitir que, mediante la aplicación extraterritorial de la legislación interna, otros Estados les dicten cómo deben conducirse. Todos los Estados deben respetar por igual

el derecho internacional, y se deben rechazar la selectividad y los dobles raseros en la aplicación y ejecución de los tratados internacionales.

24. **El Sr. Koppanyi** (Austria) dice que el derecho internacional y el estado de derecho son los fundamentos del sistema internacional. Un sistema internacional basado en normas, con reglas claras y predecibles que se aplican por igual a todos los Estados Miembros es una condición previa esencial para la paz duradera, la seguridad, el desarrollo económico y el progreso social. Austria insta a los Estados Miembros a promover un orden internacional basado en el estado de derecho y el derecho internacional, con las Naciones Unidas en su centro, y a ratificar y poner en práctica los acuerdos internacionales pertinentes y resolver las controversias por medios pacíficos, incluida su remisión a la Corte Internacional de Justicia.

25. La rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad son cruciales en las violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional. Se debe poner fin a las atrocidades en masa y se debe hacer comparecer ante la justicia a sus autores, incluso por conducto de los mecanismos internacionales de justicia penal. Austria apoya enérgicamente a la Corte Penal Internacional y recientemente ratificó las enmiendas al Estatuto de Roma de la Corte, aprobadas en la Conferencia de Examen celebrada en Kampala (Uganda) en 2010; alienta a los demás Estados a que procedan de la misma manera. La Corte no puede cumplir su mandato sin el apoyo material y político de los Estados Miembros. Igualmente, todos los Estados deben cumplir su obligación de cooperar con arreglo a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Respecto de los regímenes de sanciones, a los fines de fortalecer el estado de derecho es necesario contar con procedimientos justos y claros para su aplicación.

26. Las actividades de promoción del estado de derecho deben centrarse más estrechamente en la prevención de las violaciones de los derechos humanos. En tal sentido, Austria encomia la iniciativa del Secretario General “Los derechos humanos primero”. También ha destacado repetidamente la interdependencia que existe entre el estado de derecho y la protección de los derechos humanos, como se reconoce en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General sobre el Estado de Derecho en los Planos Nacional e Internacional (A/RES/67/1), y considera que se deben intensificar las

actividades encaminadas a lograr la ratificación universal de los tratados internacionales de derechos humanos. Austria acoge con beneplácito el informe del Secretario General preparado en respuesta a la solicitud hecha por la Asamblea General en el párrafo 41 de la Declaración de la Reunión de Alto Nivel (A/68/213/Add.1) y está dispuesta a contribuir activamente en las iniciativas de seguimiento dirigidas a seguir desarrollando los vínculos entre el estado de derecho y los tres pilares de las Naciones Unidas. Con tal fin, en junio de 2014 organizó junto con Sudáfrica y ONU-Mujeres una mesa redonda sobre el acceso de la mujer a la justicia. Las actividades de Austria en el marco de las Naciones Unidas y su cooperación al desarrollo han incluido una especial atención al fortalecimiento del estado de derecho, incluido el acceso a la justicia y, en consecuencia, acoge con beneplácito el tema del debate en curso. También respalda plenamente la labor del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho de la Dependencia sobre el Estado de Derecho.

27. La buena gobernanza y el estado de derecho en los planos nacional e internacional son esenciales para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el hambre. En consecuencia, el estado de derecho, incluido el acceso a la justicia, será un elemento crucial que determinará el éxito de la agenda de desarrollo para después de 2015 y debería haberse reflejado más adecuadamente en el objetivo 16 de la propuesta del Informe del Grupo de Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/68/970). El estado de derecho es también fundamental para un crecimiento económico inclusivo y equitativo. Es más probable que las empresas tanto grandes como pequeñas prosperen cuando las leyes están claramente definidas, son conocidas por el público y se las aplica de manera neutral. En tal sentido, Austria también encomia la contribución de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional a la promoción del estado de derecho, en particular en el contexto del comercio internacional, el desarrollo a largo plazo, la prevención de conflictos y la reconstrucción después de los conflictos.

28. La corrupción es un verdadero enemigo del desarrollo y es necesario abordarla, ya que disuade a los inversionistas y exacerba las desigualdades en las sociedades. La clave del éxito es la educación y capacitación sobre la manera de evitar las prácticas corruptas. En Austria, la Academia Internacional de

Lucha contra la Corrupción ofrece en esa esfera educación y capacitación profesional, así como asistencia técnica. Además, Austria promueve la cooperación y los intercambios entre los tribunales constitucionales nacionales. El control eficaz de la legislación nacional a cargo de un poder judicial competente e independiente es una piedra angular de un estado de derecho efectivo en el plano nacional. En su condición de coordinador del Grupo de Amigos del Estado de Derecho, Austria seguirá dando la más alta prioridad a las actividades de promoción del estado de derecho, no como un objetivo abstracto, sino como medio de proteger los derechos e intereses de las personas.

29. *El Sr. Gharibi (República Islámica del Irán), Vicepresidente, ocupa la Presidencia.*

30. **El Sr. Li Yongsheng** (China) dice que China ha sido siempre un sólido defensor del estado de derecho en el plano internacional y desde hace mucho tiempo presta apoyo a su desarrollo progresivo. Durante el año en curso se celebra el sexagésimo aniversario de la proclamación de los Cinco Principios de la Coexistencia Pacífica, razón por la cual China, Myanmar y la India organizaron una serie de actividades conmemorativas. Los participantes en esas actividades destacaron que los Cinco Principios reflejan los requisitos esenciales del derecho internacional: representan los intereses comunes de los países y la comunidad internacional, encarnan los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional, gozan de amplio apoyo por parte de la comunidad internacional por ser normas básicas que rigen las relaciones internacionales y han contribuido sobremanera a la promoción de la paz, la estabilidad y el desarrollo.

31. Como destacó el Presidente de China en una conferencia de conmemoración de los Cinco Principios, los países deben promover conjuntamente el estado de derecho en las relaciones internacionales, utilizar uniformemente las normas aplicables a fin de aclarar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto y procurar la paz y el desarrollo. Todos los países deben ejercer sus derechos de conformidad con la ley y oponerse a las tentativas de distorsionar el derecho internacional y socavar, invocando el estado de derecho, la paz y la estabilidad y los derechos e intereses legítimos de otros países. En un coloquio de derecho internacional se reconoció la importancia de

los Cinco Principios para guiar las actividades colectivas encaminadas a promover la paz, la seguridad y el desarrollo internacionales y se afirmó que las relaciones internacionales se deben guiar por los conceptos de soberanía, paz, progreso para todos y justicia consagrados en los Principios. El Gobierno de China ha destacado que China seguirá siendo un sólido defensor de la soberanía del Estado, un firme sostenedor de la paz y seguridad internacionales, un enérgico promotor de la cooperación económica y social y el desarrollo y un activo artífice del orden internacional y el estado de derecho.

32. No existen modelos ni estándares únicos del estado de derecho. Los países tienen el derecho de elegir su propio camino según las circunstancias nacionales. Las actividades de las Naciones Unidas encaminadas a promover el estado de derecho deben ser más públicas y transparentes y tener plenamente en cuenta las opiniones de los Estados Miembros, especialmente los países en desarrollo. El Gobierno de China otorga gran importancia al estado de derecho en el mejoramiento de la gobernanza nacional y la salvaguardia de los derechos individuales. Ha mejorado la asistencia y la indemnización a las víctimas de delitos penales y se está examinando un sistema de recursos en la ejecución de los fallos que permita a los tribunales ofrecer una solución adecuada al ganador en los casos en que ambas partes económicas tengan dificultades y, en consecuencia, el perdedor no esté en condiciones de cumplir la condena. Un sistema de asistencia letrada en que participan el Gobierno, abogados y profesionales del derecho, personal de servicios jurídicos comunitarios y voluntarios ofrece servicios letrados gratuitos a los litigantes con dificultades financieras.

33. La reclamación de China respecto de la soberanía sobre islas en el mar de China Meridional está plenamente justificada con una serie de pruebas históricas y jurídicas. Toda controversia deberá ser resuelta por los países directamente interesados mediante negociaciones y consultas fundadas en el respeto de los antecedentes históricos y el derecho internacional. Esa ha sido la posición uniforme de China y es una cuestión importante comprendida comúnmente por los países de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), tal como se refleja en la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional. Es lamentable que cierto país haya infringido los compromisos

asumidos en virtud de esa declaración. La situación general actual en el Mar de China Meridional es estable y China se opone a toda tentativa de exagerar las presuntas tensiones en la región.

34. China está abierta a las propuestas relativas al Mar de China Meridional, pero estas deben ser bien intencionadas, objetivas, imparciales y constructivas, y no sacar de la nada nuevas ideas, aplicar dobles raseros, provocar más problemas y diferencias, perturbar la aplicación amplia de la Declaración y poner en peligro los intereses de China y los países de la ASEAN. Actos como la ocupación ilegal de islas y arrecifes de China y la realización de actividades de construcción con miras a perpetuar una ocupación ilegal son directamente contrarios al espíritu del estado de derecho. China sigue comprometida a aplicar en su integridad la Declaración sobre la Conducta de las Partes en el Mar de China Meridional y trabajará con los países que corresponda a fin de gestionar las diferencias, promover la cooperación marítima y el desarrollo conjunto y hacer del Mar de China Meridional un mar de paz, amistad y cooperación.

35. **El Sr. Aldahhak** (República Árabe Siria) hace suyas las observaciones formuladas el día anterior por los representantes de Cuba y la Federación de Rusia respecto del informe del Secretario General (A/68/213/Add.1) y dice que, durante casi siete decenios, el estado de derecho ha constituido el marco dentro del cual los Estados Miembros de las Naciones Unidas han procurado reforzar el respeto por el derecho internacional y establecer normas que rijan las relaciones internacionales. El estado de derecho es un todo indivisible. No es posible ni aceptable insistir en que el estado de derecho se aplica exclusivamente en el plano nacional o únicamente a ciertos países, ignorando el estado de derecho en otros países o en el plano internacional. La adhesión al estado de derecho exige respetar los principios del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, concretamente los principios de igualdad soberana, no injerencia en los asuntos internos de los Estados y arreglo pacífico de controversias, así como poner fin a situaciones de ocupación y luchar contra el terrorismo.

36. Los obstáculos a la primacía del estado de derecho en el plano internacional no se deben a la falta de mecanismos o instrumentos internacionales, sino más bien a la selectividad, la aplicación de dobles raseros y la politización de ciertas cuestiones a que recurren ciertos países que procuran imponer su



hegemonía y decisiones unilaterales a otros países, incluso mediante la amenaza o el uso de la fuerza sin un mandato claro del Consejo de Seguridad. Esos países siguen ideas que sirven a sus intereses nacionales, pero que no gozan de consenso en la comunidad internacional. El estado de derecho no debe interpretarse como hacer caso omiso de la civilización o las especificidades culturales de un país o región, ni tampoco imponer las normas de ciertos países o ignorar el derecho fundamental de los pueblos de elegir su modelo nacional de gobernanza.

37. Es evidente que la injerencia en los asuntos internos de un Estado o los ataques a su integridad territorial o soberanía nacional son contrarios al estado de derecho, que no podrá prevalecer si la comunidad internacional guarda silencio, como lo ha hecho durante decenios, cuando los dirigentes de ciertos estados árabes y de la región, cuya identidad es bien conocida, prestan un apoyo incondicional al terrorismo que amenaza a la República Árabe Siria y a su pueblo. Durante tres años los gobiernos de esos países han prestado distintos tipos de apoyo a combatientes terroristas extranjeros y mercenarios llegados de todas partes del mundo para sembrar la muerte y la destrucción a la República Árabe Siria y así poder difundir sus ideas extremistas, que nada tienen que ver con ninguna religión ni civilización ni con la humanidad. Han permitido a los terroristas engrosar sus filas e infligir las atrocidades más bárbaras y horribles al pueblo sirio, a sus vecinos iraquíes y a nacionales de otros países, amenazando a la región y a todo el mundo.

38. Lamentablemente, los órganos competentes de las Naciones Unidas han ignorado los hechos documentados presentados por la delegación siria y hecho caso omiso de sus solicitudes de exhortar a esos países a que pongan fin a sus actos de terrorismo y violaciones del derecho internacional. Ignorar las prácticas de esos países y no hacer rendir cuentas a sus autoridades es claramente contrario a la adhesión profesada por algunos países al derecho internacional y a la aplicación de los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo.

39. El estado de derecho es incompatible con la imposición a otros países de medidas coercitivas unilaterales. Las Naciones Unidas han dicho muchas veces que esas medidas coercitivas son ilícitas; sin embargo, dichas medidas están afectando negativamente la vida de los sirios, impidiéndoles

satisfacer sus necesidades cotidianas, como el acceso a alimentos, servicios médicos y combustible. Obviamente, el estado de derecho no prevalecerá mientras el Golán sirio y otros territorios árabes sigan ocupados, ni mientras las autoridades ocupantes sigan cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino, ni mientras la comunidad internacional guarde silencio sobre el apoyo prestado a Israel y a las organizaciones terroristas que operan en la zona de separación, que repetidamente han atacado al personal de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación. No habrá justicia hasta que no se haga rendir cuentas a los gobiernos que prestan apoyo a los terroristas.

40. Los Estados Miembros deben respetar las disposiciones del derecho internacional y los propósitos y principios de la Carta, así como abstenerse de todo acto que pueda amenazar la paz y seguridad internacionales. La asistencia técnica prestada en relación con el estado de derecho no debe utilizarse como medio de presión política, ni como pretexto para injerirse en los asuntos internos de un Estado o amenazar su soberanía.

41. **El Sr. Sousa Bravo** (México) dice que México se une a quienes han hecho un llamado para que se realice un examen amplio de las recomendaciones formuladas en el informe del Secretario General respecto de los vínculos que existen entre el estado de derecho y los tres pilares de las Naciones Unidas ([A/68/213/Add.1](#)). El plano internacional del estado de derecho es inseparable de cualquier discusión del tema y México habría dado la bienvenida a que en el informe se hubiera dado una mayor consideración a sus posibilidades. El estado de derecho concede previsibilidad y legitimidad a las acciones de los Estados, fortalece su igualdad soberana y sustenta la responsabilidad de un Estado para con todos los individuos. También es indispensable para el desarrollo y, como se reconoce en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel ([A/RES/67/1](#)), está firmemente vinculado a los derechos humanos y a la democracia, además de formar parte de los valores y principios fundamentales y universales de las Naciones Unidas.

42. Si bien México reconoce la complejidad del debate sobre el tema, así como la riqueza que refleja la diferencia de posiciones en el mismo, no puede compartir las objeciones a que las discusiones sobre el estado de derecho se lleven a cabo de una manera estructurada, integral y con la perspectiva del camino a

seguir en el futuro. El estado de derecho es un tema transversal que incide en varios aspectos de la labor de la Asamblea General y los demás órganos principales de la Organización, por lo que es inviable limitar su consideración a la Sexta Comisión, como quedó demostrado en las negociaciones del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular la compleja discusión en torno a la propuesta de objetivo 16 en relación con la mención de estado de derecho. México reconoce la inclusión del concepto en el mencionado objetivo y en las metas relacionadas, si bien habría deseado una declaración más ambiciosa del compromiso de la comunidad internacional, en particular en materia de derechos humanos. México buscará reforzar ese compromiso durante el proceso intergubernamental para la definición de la agenda para desarrollo después de 2015.

43. Los elementos proporcionados por el Secretario General en su informe son un buen punto de partida para las discusiones en este ámbito. No es la primera vez que la Asamblea General enfrenta un tema polémico o con enfática diferencia de posiciones. En el pasado, se han utilizado distintas herramientas para examinar cuestiones complejas y multifacéticas y México cree que el debate debe centrarse en esas opciones y las posibilidades que presentan.

44. En cuanto al tema de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia, México, como otros países, enfrenta grandes desafíos en ese ámbito. Sin instituciones modernas y eficientes es imposible contar con un estado de derecho sólido y eficaz donde la ley se cumpla sin excepciones ni demoras y todos, especialmente los grupos más vulnerables, tengan acceso a la justicia. México se encuentra en el proceso de instrumentación del nuevo modelo de justicia penal adversarial, que busca combatir los problemas más apremiantes del sistema. El nuevo Código Único de Procedimientos Penales permitirá la aplicación homogénea de criterios judiciales, lo que generará mayores condiciones de certeza y seguridad jurídica en las tareas de procuración y administración de justicia. De igual forma, el Gobierno ha trabajado de manera intensiva en la creación de capacidades y la promoción de los derechos humanos en los órganos judiciales nacionales, en consonancia con los instrumentos internacionales de derechos humanos en que México es parte. La Procuraduría General de la República se

encuentra inmersa en un proceso de reestructuración y reorganización, que incluye su plena autonomía legal.

45. México coincide con quienes han destacado la importancia de la pertenencia nacional: los procesos en materia de estado de derecho deben ser encabezados por los Estados Miembros. Los más de 400 compromisos formulados por los Estados durante la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho reflejan no solo la riqueza de oportunidades de avance sobre el tema, sino que además representan un repertorio inmejorable de experiencias en los ámbitos nacional e internacional. México está dispuesto a compartir sus experiencias en este contexto, concretamente en lo que respecta a la promoción del Tratado sobre el Comercio de Armas, que entrará en vigor próximamente. México iniciará un ejercicio centrado en los compromisos realizados, con objeto de compartir las mejores prácticas y experiencias en materia de fortalecimiento y promoción del estado de derecho en los planos nacional e internacional, e invitará a los Estados Miembros a incorporarse a esas actividades.

46. **La Sra. Woldeyohannes** (Eritrea) dice que, si bien Eritrea otorga gran importancia al debate en curso sobre el tema de la puesta en común de las prácticas nacionales de los Estados para el fortalecimiento del estado de derecho mediante el acceso a la justicia, está firmemente convencida de que se debe prestar mayor atención a la dimensión internacional del estado de derecho. Solo mediante el fortalecimiento del estado de derecho y la justicia en el plano internacional será posible abordar la seguridad mundial, los derechos humanos y los retos al desarrollo, y lograr la paz y seguridad nacionales, regionales e internacionales. La creación de sistemas judiciales independientes, eficientes y competentes constituye el núcleo de las actividades de Eritrea para el fortalecimiento del estado de derecho en el plano nacional. Al mismo tiempo, son prioridades fundamentales salvaguardar la soberanía, integridad territorial e independencia de Eritrea contra la agresión, la ocupación, las sanciones injustificadas y la beligerancia de las potencias hostiles.

47. El compromiso inequívoco de Eritrea con el logro de una sociedad pacífica e inclusiva mediante el acceso a la justicia para todos debe medirse a la luz de los enormes problemas afrontados durante el proceso de creación de la nación. El Gobierno ha establecido varias prioridades fundamentales, entre ellas una

mayor participación de la comunidad en el proceso judicial mediante tribunales comunitarios que aumentan el acceso del pueblo a la justicia a un costo menor, con lo que se facilita dicho acceso para los pobres. La legislación promulgada recientemente, que cambió la competencia de los tribunales, perfeccionó las leyes procesales y mejoró la ejecución de los fallos, ha aumentado todavía más el acceso de los ciudadanos a los servicios judiciales ofrecidos en sus comunidades. Eritrea trabaja en asociación estrecha con las Naciones Unidas, incluso mediante un marco de asociación y cooperación estratégica, con miras a fortalecer su sistema judicial teniendo en cuenta sus necesidades y prioridades y prestando especial atención a la implicación local y nacional.

48. Entre las medidas encaminadas al empoderamiento de la mujer cabe mencionar la tipificación de la mutilación genital femenina y el matrimonio de menores. Se ha consagrado en la legislación el derecho de la mujer a la propiedad de sus bienes y a igual paga por igual trabajo, y el 30% de los escaños parlamentarios se ha asignado a las mujeres. A fin de cerrar la brecha de género en la profesión jurídica, se han abierto nuevos centros de capacitación y se ha introducido una política que establece que uno de cada tres jueces debe ser mujer. Como parte de la política gubernamental de empoderar a la juventud, se han incorporado jóvenes al órgano ejecutivo de la Unión Nacional de Mujeres de Eritrea. Con miras a mejorar la justicia social y alentar el desarrollo sostenible, se ha trabajado para garantizar la seguridad alimentaria, mejorar la salud y la educación y reducir la disparidad entre la población urbana y rural mediante la construcción de caminos, diques, escuelas, centros sanitarios y hospitales.

49. **El Sr. Šćepanović** (Montenegro) dice que el estado de derecho es uno de los pilares de la prosperidad compartida. Es también vital para la rendición de cuentas gubernamental, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos. La no adhesión al estado de derecho es motivo de preocupación común. Todos los países tienen la obligación de fortalecer el estado de derecho y promover los derechos humanos, e incumbe a las Naciones Unidas prestar un apoyo adecuado y eficiente a esas actividades. Por ser un país con una sociedad y una economía abiertas, Montenegro presta especial atención al estado de derecho en los planos nacional e internacional. La implicación nacional en las

actividades relacionadas con el estado de derecho, el respeto del derecho internacional y la incorporación y aplicación de las normas internacionales en el sistema jurídico interno son algunos de sus objetivos fundamentales.

50. Las tentativas de fortalecer el estado de derecho en el plano internacional se verían significativamente afectadas si no hubiera un sólido estado de derecho en el plano nacional, ya que los dos están inextricablemente vinculados. Los Estados pueden contribuir al estado de derecho en el plano internacional reforzando los vínculos entre este y los derechos humanos, la paz y la seguridad. En consecuencia, Montenegro tiene el compromiso de prestar apoyo a las iniciativas en materia de estado de derecho de las Naciones Unidas y la Unión Europea, entre ellas las operaciones de mantenimiento de la paz y la capacitación de los miembros de la policía y el poder judicial. También está comprometido con la codificación del estado de derecho en el plano internacional mediante un mayor desarrollo del derecho internacional y se muestra confiado en que las Naciones Unidas disponen de los instrumentos adecuados para progresar en esa labor.

51. El respeto del estado de derecho es uno de los fundamentos y un requisito previo de las relaciones internacionales, la coexistencia pacífica, la estabilidad y el desarrollo. Los mecanismos de arreglo pacífico de controversias y los instrumentos de derecho internacional son útiles para mantener la paz y seguridad internacionales y garantizar el estado de derecho y la justicia en los dos planos. Montenegro reconoce la importante función que desempeñan la Corte Penal Internacional y otros tribunales en la lucha contra la impunidad y presta un enérgico apoyo a la cooperación con todas las instituciones de esa naturaleza, especialmente el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia.

52. El estado de derecho y el correcto funcionamiento del sector judicial son factores que contribuyen a un crecimiento y desarrollo inclusivos. El acceso imparcial a la justicia y la lucha contra la impunidad son también elementos que se refuerzan mutuamente y resultan esenciales para la vinculación entre estado de derecho y desarrollo. Los derechos humanos y el estado de derecho son elementos promotores cruciales, además, de objetivos por sí mismos, por lo que deben incluirse en la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015. Mejorar el

acceso a la justicia, reducir la violencia, promover los derechos humanos y asegurar que las instituciones sean eficientes, justas y responsables son retos que atañen a todos los países, no solo los países en desarrollo y, en consecuencia, complace a Montenegro que la agenda para después de 2015 se aplique por igual tanto a los países ricos como a los pobres. Todos los gobiernos deben responder a las necesidades y preocupaciones de los pueblos a los que se les ha encomendado servir; se ha de alentar la participación de los agentes de la sociedad civil; y se debe permitir la supervisión democrática de la aplicación del estado de derecho.

53. **El Sr. Rao** (India) dice que la India agradece la asistencia prestada por las Naciones Unidas a los países menos adelantados y otros países en desarrollo en la promoción del estado de derecho al crear o alentar instituciones y prácticas aceptables para esos países. Sin embargo, es importante señalar que, en el plano nacional, la creación de leyes corresponde exclusivamente al dominio soberano de los parlamentos nacionales. También cabe observar que no existe una definición convenida del término “estado de derecho”.

54. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho se reafirmó el deber de todos los Estados de arreglar sus controversias internacionales por medios pacíficos. También se destacó la importancia de que prosigan los esfuerzos orientados a reformar el Consejo de Seguridad. La India considera esencial que se reforme el Consejo lo antes posible para que pase a ser un órgano eficiente, transparente y de representación amplia. Insta a la comunidad internacional a que asegure la observancia del estado de derecho en el plano internacional. Desde hace mucho tiempo existe un déficit respecto del estado de derecho en las instituciones de gobernanza mundial, en particular en los órganos y organismos de las Naciones Unidas, que no son representativos ni transparentes, lo que plantea interrogantes acerca de su legitimidad. Se debe dar a los países en desarrollo una voz y participación reales en la adopción de decisiones mundiales, y las instituciones internacionales deben ser un fiel reflejo de la realidad contemporánea y las normas del estado de derecho si se quiere que aborden de manera eficaz los retos globales.

55. En cuanto a los temas objeto de atención en el debate en el período de sesiones actual, la India considera que un sistema judicial independiente, eficiente y competente es la espina dorsal del estado de derecho, ya que aporta medios legítimos y pacíficos de

solución de controversias, asegura la rendición de cuentas y ofrece la posibilidad de reparación. La Constitución de la India establece el objetivo de asegurar la justicia social, económica y política a todos sus nacionales y garantiza a todos ellos los derechos y las libertades fundamentales, incluidos el derecho a la vida y la libertad, la igual protección de la ley y la igualdad ante ella, la protección contra la detención arbitraria y la libertad de expresión, asociación y religión. Otro derecho importante es el derecho de recurso, incluida la facultad de dirigirse a la Corte Suprema en casos relativos a violaciones de derechos o libertades fundamentales. La Constitución también garantiza a los particulares acceso a los tribunales supremos de cada estado para obtener reparación por la violación de sus derechos. Además, garantiza a todos el derecho de que sus controversias se resuelvan en una audiencia pública justa ante una corte o un tribunal independiente u otro foro imparcial. A fin de asegurar el acceso a la justicia sobre la base de la igualdad de oportunidades, la Constitución ordena la prestación de asistencia letrada gratuita a los ciudadanos pobres y desfavorecidos. La legislación que puso en práctica esa disposición se promulgó en 1987.

56. Por conducto de sus fallos y activismo, el poder judicial de la India sostiene la esencia de las disposiciones constitucionales que aseguran a todos la igualdad de acceso a la justicia. La Corte Suprema y los tribunales superiores han afirmado en varias causas que no se pueden derogar los derechos fundamentales conferidos por la Constitución, especialmente los derechos a la vida y la libertad, la igualdad y protección contra la discriminación y el acceso a la justicia. La Corte Suprema también ha adoptado medidas proactivas a fin de promover el acceso a la justicia relajando las normas tradicionales de *locus standi* y las normas procesales, al tratar una petición o incluso una carta de una persona u organismo que actúe pro bono como petición formal para incoar un proceso judicial respecto de los derechos fundamentales. En las causas pertinentes, la Corte ha nombrado comisionados o juntas de expertos a fin de realizar investigaciones de determinación de los hechos.

57. Respecto del informe del Secretario General sobre el fortalecimiento de los vínculos que existen entre el estado de derecho, los derechos humanos, la paz y la seguridad ([A/68/213/Add.1](#)), se debe celebrar un debate amplio y completo sobre los posibles

instrumentos y modelos propuestos en el informe. Ese debate tendría que celebrarse esencialmente en la Sexta Comisión.

58. **La Sra. Zarrouk Boumiza** (Túnez) dice que Túnez sigue dispuesto a cooperar con los organismos de las Naciones Unidas respecto del estado de derecho, sobre la base de la transparencia y el diálogo constructivo. Túnez respeta las obligaciones que le incumben en virtud de los instrumentos jurídicos en que es parte y se ha comprometido a asegurar que su legislación se adecue a las normas y los estándares internacionales relacionados con el estado de derecho. Seguirá participando en el fortalecimiento de todos los mecanismos necesarios para sostener los valores universales de los derechos humanos, de conformidad con la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho. Por ejemplo, ha propuesto la creación de una corte constitucional internacional que preste asistencia a las naciones recientemente liberadas en esferas como la elaboración de constituciones y la prevención del dominio por la fuerza. La propuesta ha sido bien recibida en los círculos académicos y Túnez espera que también encuentre apoyo entre los Estados Miembros.

59. En el plano nacional, Túnez ratificó recientemente una nueva Constitución que garantiza las libertades y los derechos individuales y colectivos y establece los fundamentos de una verdadera democracia. Una de sus disposiciones más importantes es la separación de poderes y la independencia de la judicatura. La nueva Constitución también establece un tribunal constitucional, que se puede expedir sobre la constitucionalidad de las normas internas y, en consecuencia, protege las libertades y los derechos de los ciudadanos. Además, Túnez ha avanzado mucho en el logro de la justicia de transición, incluida la promulgación en diciembre de 2013 de una nueva ley que establece una autoridad de la verdad y la dignidad para investigar las violaciones graves de los derechos humanos, determinar el destino de las víctimas y otorgar indemnizaciones por los daños causados.

60. **El Sr. Shava** (Zimbabwe) dice que el vínculo entre desarrollo, paz y seguridad, derechos humanos y estado de derecho es inextricable. El estado de derecho en el plano internacional es esencial para el desarrollo socioeconómico global y el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales. La Carta de las Naciones Unidas es el fundamento del estado de derecho, y las relaciones entre los Estados se deben regir por sus

principios, entre ellos la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la no agresión, la coexistencia pacífica y el respeto de la independencia, soberanía e integridad territorial. Las Naciones Unidas deben seguir promoviendo la causa de la libre determinación a fin de que los pueblos que continúan viviendo bajo ocupación y subyugación puedan liberarse y disfrutar plenamente de sus derechos.

61. Según se convino en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel, los Estados deben abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza, que socavan el desarrollo, la paz, la seguridad, los derechos humanos y el estado de derecho. Se ha comprobado ampliamente en varias ocasiones recientes que las intervenciones violentas no siempre logran resultados sostenibles; por el contrario, a menudo cuestan vidas, destruyen la infraestructura económica y social y crean inestabilidad, haciendo que sean los civiles inocentes quienes sufran las consecuencias. En la Declaración también se insta a los Estados a que se abstengan de aplicar sanciones punitivas unilaterales y otras medidas contra otros Estados. Sin embargo, ese tipo de medidas lamentablemente siguen siendo usadas por Estados poderosos contra los más débiles a fin de lograr objetivos políticos mezquinos. Zimbabwe y otros países en desarrollo siguen sufriendo este tipo de sanciones unilaterales injustificadas. Mientras los Estados Miembros trabajan para dar forma a la agenda para el desarrollo después de 2015, cabe esperar que los esfuerzos de los países en desarrollo no sigan siendo afectados por sanciones económicas unilaterales y otras medidas coercitivas.

62. Zimbabwe presta apoyo a las actividades internacionales encaminadas a poner fin a la impunidad y a hacer que los responsables de atrocidades rindan las debidas cuentas. Sin embargo, le preocupa que el sistema de justicia penal internacional funcione de manera selectiva, centrando su atención en los casos menos controversiales del mundo en desarrollo, especialmente en África, con lo que se socava la confianza en el sistema. Para que este goce de credibilidad, la percepción debe ser que se aplica a todos de manera universal e igualitaria.

63. En el plano nacional, Zimbabwe está comprometido con el estado de derecho, la buena gobernanza y el fortalecimiento de las instituciones judiciales y de rendición de cuentas. En la nueva Constitución se hace hincapié en la separación de



poderes y se aumenta la independencia de la judicatura. Todas las leyes internas se están ajustando a lo dispuesto en la nueva Constitución. Varios organismos independientes, entre ellos las comisiones de derechos humanos, de lucha contra la corrupción y de los medios de difusión, protegen los derechos e intereses del ciudadano y ayudan a seguir fortaleciendo el estado de derecho.

64. Zimbabwe acoge con beneplácito la idea de compartir las prácticas nacionales para el fortalecimiento del estado de derecho y considera que las Naciones Unidas son uno de los foros más adecuados para compartir las mejores prácticas y crear capacidad mediante una cooperación genuina. Zimbabwe está comprometido con la cooperación basada en el entendimiento y respeto mutuos. Por ser una nación pequeña, se fía del estado de derecho para protegerse de las medidas arbitrarias de los ricos y poderosos, y considera que las relaciones armoniosas entre los Estados y el desarrollo nacional solo se pueden garantizar mediante el multilateralismo, el diálogo y la cooperación, y no por la fuerza y la coacción.

65. **El Sr. Gumende** (Mozambique) dice que el actual período de sesiones se está celebrando en un momento en que los principios y valores fundamentales del estado de derecho en los planos nacional e internacional afrontan grandes retos. El debate en curso ofrece una oportunidad para que los Estados Miembros intensifiquen su decisión de promover una cultura de legalidad y primacía del estado de derecho, sobre la base del pleno respeto de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional como condición previa para la paz, la estabilidad, el desarrollo económico y la coexistencia pacífica. Mozambique valora la función desempeñada por las Naciones Unidas como custodio de los marcos jurídicos internacionales al promover la adhesión universal a esos principios y al derecho internacional.

66. La comunidad internacional debe seguir procurando la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, prestando especial atención a la promoción de la ratificación y aplicación cabal de los tratados básicos, reconociendo al mismo tiempo el apoyo que a tal fin se debe dar a algunos Estados Miembros. Se debe rendir especial tributo a la Comisión de Derecho Internacional y a la Sexta Comisión por su papel en la elaboración y difusión de

tratados internacionales. Mozambique reconoce la función cada vez más importante de las instituciones internacionales en el sostenimiento del estado de derecho y señala la promesa de las Naciones Unidas de encabezar las actividades de lucha contra la impunidad. También presta apoyo a la labor desempeñada por el Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia sobre el Estado de Derecho en la coordinación de las actividades pertinentes de las Naciones Unidas. Por otra parte, deben destacarse los programas de capacitación de la Organización, al igual que las jornadas de los tratados que se celebran todos los años.

67. En el plano nacional, Mozambique mantiene su compromiso de promover la adhesión al estado de derecho, entre otras cosas, asegurando la aplicación interna de las obligaciones internacionales y fortaleciendo sus instituciones democráticas, incluso mediante reformas del sistema de justicia encaminadas a proteger los derechos humanos y garantizar una eficaz administración de justicia. El Gobierno considera que una buena gobernanza y la adhesión al estado de derecho contribuirán a un desarrollo económico más efectivo, asegurarán la participación del pueblo en la adopción de decisiones y garantizarán el respeto de los derechos humanos, con lo que se consolidarán la paz y la estabilidad en el plano nacional.

68. Para hacer frente a los retos de un sistema político democrático en evolución y mejorar el estado de derecho, se ha revisado la Constitución de Mozambique con el objetivo de reforzar los principios fundamentales de buena gobernanza, entre ellos la libertad de expresión, la libertad de afiliación a los partidos políticos y el respeto de los derechos y libertades fundamentales del ciudadano. A fin de asegurar el derecho constitucional de la igualdad de todos ante la ley, se han adoptado medidas para fortalecer la función de las instituciones de supervisión, incluidas la Corte Constitucional, la Oficina del Procurador General, la Oficina de Lucha contra la Corrupción, la Comisión de Denuncias del Parlamento y la recientemente establecida Comisión de Derechos Humanos. También se están atribuyendo mayores poderes a la Oficina del Ombudsman con miras a reforzar las garantías individuales y hacer que el Gobierno y la administración pública rindan mejor las cuentas. Se han logrado importantes progresos en la

reforma jurídica, el desarrollo y la capacitación de los recursos humanos y la creación de infraestructura.

69. El estado de derecho es de fundamental importancia para abordar la corrupción, uno de los retos más importantes para mantener la confianza pública y promover la rendición de cuentas, la legitimidad y la transparencia gubernamentales. Entre las actividades de lucha contra la corrupción cabe mencionar el fortalecimiento de las leyes vigentes sobre el tema y la promulgación de otras nuevas, entre ellas una ley de probidad pública dirigida a impedir que los funcionarios públicos, incluidos los políticos, malversen fondos públicos o se aprovechen de su cargo. La ley también procura alentar una conducta moral adecuada y consolidar las buenas prácticas de la administración pública. Con miras a promover la buena gobernanza y la rendición de cuentas, todos los años se realizan comprobaciones de cuentas independientes y sus resultados se presentan al Parlamento. Además, como medio de impedir la malversación de los recursos públicos y asegurar la protección de los derechos del ciudadano, en todas las provincias se han establecido tribunales administrativos. Todas las reformas democráticas y judiciales fueron precedidas de consultas públicas, que ofrecieron la oportunidad de que ciudadanos, políticos, la sociedad civil y otros interesados participaran en el proceso de adopción de decisiones.

70. **El Sr. Sargsyan** (Armenia), después de expresar su agradecimiento por las actividades del Grupo de Coordinación y Apoyo sobre el Estado de Derecho y la Dependencia sobre el Estado de Derecho, dice que, mientras las Naciones Unidas se preparan para poner en marcha la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015, es importante fortalecer los vínculos entre el estado de derecho y los tres pilares de paz y seguridad, derechos humanos y desarrollo. Armenia considera que los procesos nacionales y mundiales relacionados con el estado de derecho son mutuamente inclusivos y, si bien reconoce la importancia de la implicación nacional en el estado de derecho, considera que este también debe promoverse en el plano internacional.

71. Armenia apoya enérgicamente las actividades encaminadas a fortalecer el sistema internacional de justicia, que es fundamental para la solución pacífica de controversias y promover el acceso a la justicia. En ese contexto, es importante recordar que todos los Estados están obligados a abstenerse de la amenaza o

el uso de la fuerza de toda manera que no se adecue a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos y mantener la paz, la seguridad y la justicia. Por ser la nación que sufrió el primer genocidio del siglo XX y que sigue afrontando la negativa a reconocer ese horror, Armenia reafirma su enérgico apoyo a la lucha contra la impunidad por los crímenes más graves, incluidos el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Es más probable que esos crímenes se cometan cuando los mecanismos judiciales internacionales son ineficientes y la integridad del sistema interno de justicia está gravemente comprometida.

72. Armenia considera que los derechos humanos, incluido el derecho de los pueblos a la libre determinación, el estado de derecho y la democracia, se refuerzan mutuamente y forman parte de los valores y principios básicos universales e indivisibles de las Naciones Unidas. También está convencida de que el estado de derecho solo se puede promover efectivamente en el plano internacional si está firmemente consolidado en el plano nacional. La Constitución de Armenia garantiza que todos son iguales ante la ley y tienen derecho a la igualdad de acceso al sistema jurídico.

73. Desde que recobró la independencia, Armenia ha reconocido que la introducción de reformas amplias y la creación de instituciones en la administración pública son aspectos necesarios para fundamentar el programa de crecimiento nacional, encabezado por el sector privado. Uno de los elementos fundamentales de ese proceso es la creación de un poder judicial más eficiente, efectivo e independiente, que pueda prestar un mejor servicio al ciudadano, hacer que se cumplan los contratos y alentar las actividades e inversiones comerciales. Entre las reformas jurídicas cabe mencionar la creación de un sistema de tres instancias para los tribunales de jurisdicción general, con arreglo a la Constitución de 1995. Una segunda etapa del proceso de reforma judicial comenzó con una enmienda constitucional en 2005, dirigida a reducir la función dominante de la presidencia en el sistema judicial y aumentar la independencia de la judicatura. El código judicial promulgado en 2007 continuó la reorganización de los tribunales e introdujo una doctrina análoga a la del precedente en los sistemas de *common law*.

74. Desde 2013 se están celebrando amplios debates para examinar la necesidad de nuevas reformas constitucionales encaminadas a seguir mejorando la gobernanza y aumentar la transparencia y la rendición de cuentas. La reforma judicial sigue siendo prioritaria. En los últimos años el Gobierno, en estrecha colaboración con asociados internacionales, se ha dedicado a mejorar la capacidad institucional del colegio de abogados nacional y la calidad de la educación jurídica, promover un entorno eficaz para la protección de los recursos humanos y aumentar el grado de conocimiento de los tribunales internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por parte de la judicatura.

75. **El Sr. Koroma** (Sierra Leona) dice que la adhesión estricta al concepto global de estado de derecho es uno de los barómetros utilizados para determinar si un estado es social, económica y políticamente progresivo. La definición amplia de estado de derecho que figura en el informe del Secretario General sobre el estado de derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido conflictos ([S/2004/616](#)) perfecciona los principios fundamentales en que se basa la Carta de las Naciones Unidas y establece los fundamentos para que los Estados apliquen las mejores prácticas. Sierra Leona ha procurado aplicar rigurosamente los principios del estado de derecho en los planos nacional e internacional. Ha tenido experiencia de primera mano sobre los enormes beneficios del respeto del estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza, que son los valores y principios básicos que a menudo separan a los países en cuanto a sus distintos niveles de desarrollo.

76. En un plazo breve, Sierra Leona ha sufrido una transformación drástica, de frágil Estado devastado por 11 años de guerra civil a país estable y resiliente con una de las economías de más rápido crecimiento del mundo. Ha celebrado elecciones generales sucesivas que los observadores internacionales han encomiado como libres, justas y dignas de crédito, lo que ha abierto el camino a una transición del poder pacífica y sin tropiezos. Han mejorado la paz y la seguridad, se han levantado las sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad y la evolución de Sierra Leona se ha considerado un ejemplo de los logros de las Naciones Unidas. Si bien el brote de ébola en la región ha ralentizado los progresos y amenazado con hacer perder parte de lo ganado, Sierra Leona confía en que,

con el apoyo continuo de la comunidad internacional, el país podrá superar la enfermedad.

77. El Gobierno ha adoptado varias medidas audaces en pos de la consolidación del estado de derecho, entre ellas establecer una comisión de amplia base con representación de todos los sectores de la sociedad con miras a reformar la Constitución. Se espera que la comisión aborde las ambigüedades constitucionales. Sus conclusiones se presentarán al Parlamento y su labor culminará en un referendo. Una de las cuestiones más debatidas es la moratoria constitucional de la pena de muerte, que solo podrá enmendarse por referendo. El proceso de reforma constitucional es una disposición importante del Acuerdo de Paz de Lomé de 1991 y también una recomendación crucial de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación.

78. También se ha obrado con decisión para reformar la policía y otros organismos de seguridad y la judicatura. El acceso a la justicia ha mejorado en todas las instancias del sistema judicial. Las organizaciones de la sociedad civil han sido muy proactivas en procurar un sistema de asistencia letrada que permita a las personas contar con representación jurídica en causas civiles y penales. Se han establecido varios programas emblemáticos con el apoyo de asociados internacionales y las Naciones Unidas con miras a fortalecer el estado de derecho, incluido uno destinado a mejorar el acceso a la justicia. Se ha promulgado legislación que aborda las necesidades específicas de grupos vulnerables, incluidas leyes para proteger a personas con discapacidad, niños y víctimas de delitos sexuales.

79. El estado de derecho siempre pelagra cuando existen situaciones de pobreza extrema y escasa responsabilidad y transparencia por parte de los funcionarios públicos. Como parte de las medidas de erradicación de la pobreza extrema y sostenimiento del desarrollo económico, el Parlamento promulgó en 2008 una nueva ley de lucha contra la corrupción que permite a la comisión de lucha contra la corrupción procesar a los ministros o funcionarios superiores del Gobierno sin tener que recurrir al Procurador General ni al Ministro de Justicia. El Presidente y todos los funcionarios superiores están obligados a declarar periódicamente sus bienes mientras ejerzan funciones. Sin embargo, es todavía posible introducir mejoras en el sistema judicial y la administración de justicia en conjunto, y se debe seguir luchando contra la corrupción.

80. En el plano internacional, Sierra Leona está firmemente comprometida con el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y reconoce que no podrá sobrevivir a menos que sus metas, objetivos y aspiraciones de desarrollo se vinculen al desarrollo general de los pueblos del mundo. Seguirá prestando apoyo y colaboración a las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales a fin de promover la paz y seguridad mundiales, tratando de conseguir un mundo en que las demás naciones respeten la integridad territorial y soberanía de todos los Estados y los derechos fundamentales de todas las personas. También procurará que se ponga fin al colonialismo en los territorios no autónomos que todavía existen y seguirá promoviendo la postura de África respecto de la reforma de las Naciones Unidas, con miras a llegar a un entendimiento común que abra el camino a un Consejo de Seguridad inclusivo, transparente y que rinda cuentas de sus actos. Seguirá apoyando y fortaleciendo a la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad y prestará apoyo a todas las iniciativas de las Naciones Unidas dirigidas a garantizar que se haga efectiva la responsabilidad de los Estados de proteger a sus pueblos. Seguirá respetando fielmente el Acta Constitutiva de la Unión Africana y los protocolos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental sobre paz, democracia y estabilidad y prestará apoyo a todos los procesos de la Unión Africana que promuevan los principios e instituciones democráticos y los derechos humanos.

81. Sierra Leona afirma que existe un vínculo entre el estado de derecho en los planos nacional e internacional y el desarrollo nacional y mundial. El estado de derecho es un catalizador de la paz, la estabilidad, el desarrollo sostenible y la resiliencia. Por tratarse de un Estado que ha salido de un conflicto, Sierra Leona apoya el objetivo 16 de la serie de objetivos propuesta por el Grupo de Trabajo sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (A/68/970). Debe reconocerse que la necesidad de instituciones pacíficas y capaces debe ser un objetivo separado en la lista de prioridades en relación con la agenda para el desarrollo después de 2015.

82. **La Sra. Kanchaveli** (Georgia) dice que el estado de derecho es fundamental para la paz y la seguridad, el desarrollo y el respeto de los derechos humanos en los planos nacional e internacional. El arreglo pacífico de las controversias internacionales es uno de sus

elementos básicos en el plano internacional. Es vital que sea posible llevar ante la justicia un mayor número de controversias internacionales si se quiere mejorar la eficiencia de instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia, que desempeña una función vital en el arreglo pacífico de controversias. Georgia exhorta a todos los Estados que todavía no lo hayan hecho a que acepten la jurisdicción obligatoria de la Corte. El estado de derecho es también un elemento fundamental de la prevención y resolución de conflictos, así como del mantenimiento y la consolidación de la paz con justicia, que son cruciales para lograr la paz y la seguridad en situaciones de conflicto y posteriores a los conflictos. Debe existir una interrelación efectiva y eficiente entre los sistemas nacionales de justicia y la Corte Penal Internacional en la lucha contra la impunidad con arreglo a los principios consagrados en el Estatuto de Roma.

83. El Gobierno de Georgia está procurando adecuar la legislación nacional a los mejores estándares internacionales. El Parlamento promulgó una ley de cooperación con la Corte Penal Internacional y ratificó las enmiendas al crimen de agresión aprobadas por la Conferencia de Examen del Estatuto de Roma. La reforma del sector de la justicia es una de las prioridades fundamentales del Gobierno, como parte de un esfuerzo general por establecer y mejorar una democracia funcional y sostener los principios de transparencia, rendición de cuentas y estado de derecho. Las reformas iniciadas en 2012 tuvieron por objeto despolitizar y fortalecer la independencia del Consejo Superior de Justicia y otras instituciones judiciales. Las reformas aseguraron la participación de los jueces en la formación del Consejo Superior de Justicia y en el proceso de adopción de decisiones respecto del sistema judicial en general. En una enmienda constitucional aprobada en 2013 se introdujo el mandato vitalicio de los jueces. La próxima reforma se centrará en las medidas para garantizar la independencia de los jueces.

84. Las facultades de enjuiciamiento que anteriormente recaían en el Ministro de Justicia se han transferido al Procurador Jefe, a fin de reforzar la independencia institucional de la procuración y asegurar su imparcialidad. El código penal se ha liberalizado, modernizado y perfeccionado de conformidad con los estándares internacionales y europeos. Una nueva ley asegura la independencia, rendición de cuentas y transparencia de los programas

de asistencia letrada, un componente central de las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. Se han establecido servicios de asistencia letrada en las regiones montañosas, las regiones pobladas por minorías étnicas y otras zonas alejadas de los centros regionales.

85. En abril de 2014, Georgia aprobó una estrategia nacional de derechos humanos, encaminada a asegurar el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en esta materia. La estrategia exige explícitamente que el Estado respete, proteja, cumpla y promueva los derechos humanos y aspira a garantizar que todas las personas en Georgia conozcan los aspectos esenciales de sus derechos y puedan ejercerlos en la práctica.

86. **El Sr. Mkandawire** (Malawi) dice que, después de 30 años de dictadura en un Estado unipartidista, el Gobierno y el pueblo de Malawi tiene gran aprecio por el estado de derecho. En 1994 el pueblo de Malawi logró una democracia multipartidista y desde entonces se han celebrado cinco votaciones transparentes y reconocidas internacionalmente en que se eligieron dirigentes democráticos. Las elecciones más recientes, en 2014, se celebraron en condiciones dignas de crédito y pacíficas, de conformidad con las disposiciones constitucionales. La Constitución incluye una carta de derechos y el Gobierno garantiza que todos sus nacionales disfruten sus derechos humanos. Los nacionales cuyos derechos hayan sido infringidos pueden recurrir a instituciones como el ombudsman, la comisión de derechos humanos y los tribunales. La judicatura es independiente de los demás poderes. Los tribunales son accesibles a todos los nacionales. Un departamento gubernamental de asistencia letrada ayuda a los pobres y marginados y asegura su acceso a la justicia a bajo costo o gratuitamente. Actualmente se está poniendo en práctica en todo el país un sistema de policía comunitaria que ayuda a garantizar una mejor protección a la población, reducir la delincuencia y facilitar la rápida captura y enjuiciamiento de los sospechosos.

87. En el plano internacional, Malawi respeta estrictamente la Carta de las Naciones Unidas y está convencido de que solo adhiriéndose a sus principios las relaciones internacionales se podrán conducir de manera justa y pacífica. Malawi es también signatario del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y miembro de la Corte Internacional de Justicia, y está plenamente convencido de que los países deben recurrir a esas instituciones siempre que sea posible a

fin de resolver los malentendidos. Como miembro activo de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo y de la Unión Africana, Malawi procura promover la comprensión internacional, la cooperación y el estado de derecho entre los países. El estado de derecho debe ser observado no solo en el plano nacional, sino también en el ámbito internacional para que la paz pueda prosperar y tengan lugar el desarrollo social y económico.

88. **El Sr. AlAjmi** (Kuwait) dice que un sistema jurídico independiente, efectivo y eficiente es la piedra angular del estado de derecho y aporta medios legítimos para solucionar las controversias de manera pacífica. En el plano nacional, Kuwait ha sido un pionero en la aplicación de los principios del estado de derecho y el establecimiento de una separación clara entre los poderes del Estado. La judicatura es plenamente independiente, según se dispone en la Constitución de 1961, que también establece los derechos civiles y las libertades del ciudadano y que hacen de Kuwait un modelo de democracia. En el plano internacional, el principio del estado de derecho debe basarse en una comprensión común entre los Estados Miembros y aplicarse mediante la adhesión a los instrumentos y tratados internacionales. Las controversias internacionales deben solucionarse por medios pacíficos, incluido el recurso a instituciones internacionales como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

89. El conflicto árabe-israelí no es un conflicto por la tierra: es una lucha por la supervivencia. Israel comete violaciones del derecho y las normas internacionales con sus ataques militares sistemáticos contra Gaza. Al 8 de julio de 2014, la operación "Filo protector" había causado la muerte de más de 2.100 palestinos, incluidos 530 niños. Israel también sigue imponiendo un bloqueo ilegal en Gaza, que se ha convertido en una cárcel de personas que no han cometido otro delito que querer sobrevivir. Las actividades en curso de construcción de asentamientos constituyen una violación grave del estado de derecho y del derecho internacional humanitario. Kuwait exhorta a la comunidad internacional a que asuma sus responsabilidades y obligue a Israel a adherirse a las resoluciones internacionales pertinentes.

90. La comunidad internacional debe hacer todo lo que esté a su alcance para luchar contra el creciente flagelo del terrorismo, que amenaza la paz y seguridad internacionales. En tal sentido, Kuwait acoge con



beneplácito las actividades señaladas en los párrafos 45 y 46 del informe del Secretario General (A/69/181) y los resultados de la reunión de alto nivel del Consejo de Seguridad sobre la interrupción del flujo de combatientes terroristas extranjeros, que aprobó la resolución 2178 (2014).

91. Kuwait reafirma su adhesión a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y su apoyo a las actividades de la Organización para ampliar la difusión del derecho internacional y promover el estado de derecho, que refuerzan las actividades internacionales, regionales y nacionales para asegurar la adhesión al derecho internacional humanitario y lograr estabilidad y seguridad en el mundo.

92. **La Sra. Geoghegan** (Observadora del Comité Internacional de la Cruz Roja) dice que, en un conflicto armado, el respeto del estado de derecho mejora la eficacia del derecho internacional humanitario, al ayudar a salvar vidas y reducir el sufrimiento, así como a establecer una plataforma para reconstruir las comunidades. Los Estados son los responsables primarios de respetar el derecho internacional humanitario y asegurar que se lo respete, para lo que se deben elaborar un marco normativo claro y mecanismos judiciales sólidos que incluyan medidas de rendición de cuentas. Para tener un mejor efecto, esas medidas se deben adoptar en épocas de paz. Resulta alentador observar que los Estados han tomado diversas medidas para asegurar que su legislación interna y sus sistemas judiciales civiles y militares se adecuen a las normas internacionales que protegen a los afectados por un conflicto armado. Además, se debe contar con una serie de salvaguardias, entre ellas marcos regulatorios y garantías judiciales, para garantizar que todas las personas privadas de libertad estén protegidas frente a detenciones arbitrarias y la denegación de sus derechos y libertades fundamentales. Esas salvaguardias también tienen consecuencias prácticas porque previenen las desapariciones forzadas y aseguran el acceso a la justicia a las personas privadas de libertad.

93. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) presta apoyo a las autoridades nacionales en las actividades encaminadas a asegurar que se dé pleno efecto a la protección del derecho internacional humanitario. Si bien la promulgación de legislación interna y medidas conexas es un primer paso importante en pro del sostenimiento del estado de derecho, debe ir acompañada de una amplia labor de creación de conciencia a fin de que las medidas legislativas se

puedan traducir en una protección efectiva y que se sepa cuál es la conducta adecuada. Por invitación de los Estados, el CICR organiza y participa en programas dirigidos a audiencias como las fuerzas armadas, organismos encargados del cumplimiento de la ley, funcionarios públicos, miembros de la judicatura y parlamentarios, que contribuyen directamente a asegurar el respeto del derecho internacional humanitario y otras normas aplicables. El CICR reconoce específicamente la importante contribución de los jueces y prevé celebrar una consulta de expertos a fin de seguir apoyando las funciones del poder judicial.

94. En el plano nacional, muchos Estados han creado comisiones de derecho internacional humanitario, que desempeñan una función crucial en la elaboración de una respuesta nacional integral a las cuestiones relacionadas con el derecho internacional humanitario. En todas las actividades de creación de capacidad nacional se deben integrar las tradiciones jurídicas e institucionales locales. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja y la Media Luna Roja desempeñan una función importante en el apoyo a las actividades de las autoridades públicas que promueven la aplicación del derecho internacional humanitario. Las actividades de fortalecimiento del estado de derecho son parte de un esfuerzo más amplio de creación de un entorno propicio para proteger y garantizar el respeto de la vida y dignidad de las personas en todas las situaciones, incluso cuando se ven afectadas por la violencia. El CICR reafirma su compromiso de seguir trabajando con los Estados a tal fin.

*Se levanta la sesión a las 17.55 horas.*